

SUBDIRECTOR O SUBDIRECTORA¹
DIRECCIÓN DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
II NIVEL JERÁRQUICO

LUGAR DE DESEMPEÑO

Región Metropolitana
Ciudad Santiago

I. PROPÓSITO Y DESAFÍOS DEL CARGO

1.1 MISIÓN Y FUNCIONES DEL CARGO

Al Subdirector o a la Subdirectora del Trabajo le corresponde apoyar al Director Nacional en la conducción del Servicio, velando por la coordinación, consistencia y eficiencia de la gestión interna institucional a nivel nacional; articular el trabajo entre las Direcciones, Departamentos, Oficinas, Direcciones Regionales, Inspecciones y Centros de Conciliación y Mediación del país; y conducir los procesos de modernización y mejora continua del Servicio, de modo de asegurar el adecuado cumplimiento de la misión institucional.

Al asumir el cargo de Subdirector o Subdirectora deberá desempeñar las siguientes funciones:

- 1.- Subrogar al Director del Trabajo, con sus mismas facultades, en los casos de ausencia temporal o accidental, o mientras se nombre al titular.
- 2.- Articular con el Director del Trabajo en la conducción del Servicio y en la ejecución de las definiciones estratégicas institucionales, actuando como su principal apoyo en la gestión interna.
- 3.- Coordinar, articular y supervisar el funcionamiento de las Direcciones, Departamentos, Direcciones Regionales, Inspecciones y Centros de Conciliación y Mediación del país, asegurando consistencia en la aplicación de los lineamientos institucionales y en la entrega de productos y servicios a nivel nacional.
- 4.- Conducir los procesos de modernización institucional del Servicio, incluyendo la incorporación de tecnologías, la mejora de procesos internos, la eficiencia en el uso de los recursos y la gestión del cambio asociada.
- 5.- Ejercer la interlocución institucional con las asociaciones de funcionarios del Servicio, canalizando el diálogo en materias y condiciones generales de trabajo, en coordinación con el Director Nacional.
- 6.- Presidir o integrar los organismos internos que por ley o resolución le correspondan, entre ellos el Consejo de Bienestar, el Comité de Defensa Funcionaria y la Junta Calificadora Central.
- 7.- Garantizar la publicación periódica y la calidad editorial del Boletín Oficial de la Dirección del Trabajo, en coordinación con el Director Nacional.
- 8.- Impulsar la articulación entre las áreas operativas y de apoyo del nivel central con las Direcciones Regionales, fortaleciendo la gestión territorial del Servicio.
- 9.- Gestionar y desarrollar alianzas de cooperación institucional con organismos nacionales e internacionales en materias de gestión interna y modernización del

¹ Fecha de aprobación por parte del Consejo de Alta Dirección Pública: 05-05-2026
Representante del Consejo de Alta Dirección Pública: Manuel Inostroza Palma

Servicio, en coordinación con el Director Nacional.

10.- Gestionar los requerimientos del Director del Trabajo, expresados en nuevos encargos estratégicos o asignación de tareas adicionales a las permanentes.

1.2 ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD

Nº Personas que dependen directamente del cargo	8
Nº Personas que dependen indirectamente del cargo	2.333
Presupuesto que administra	No administra presupuesto

1.3 DESAFÍOS Y LINEAMIENTOS PARA EL PERIODO²

Corresponde a las contribuciones específicas que la autoridad respectiva espera que el/la Alto Directivo Público realice durante el período de su gestión, en adición a las tareas regulares propias del cargo, señaladas en el punto anterior. Estos lineamientos orientan el diseño del **Convenio de Desempeño ADP**.

DESAFÍOS	LINEAMIENTOS
1. Fortalecer la coordinación interna del Servicio entre las Direcciones, Departamentos, Direcciones Regionales, Inspecciones y Centros de Conciliación y Mediación, asegurando consistencia en la aplicación de los lineamientos institucionales a nivel nacional.	<p>1.1 Diseñar e implementar un plan de trabajo interáreas con énfasis en la coordinación operativa entre el nivel central y las Direcciones Regionales.</p> <p>1.2 Establecer instancias regulares de coordinación con el equipo directivo del Servicio, alineando su gestión con las definiciones estratégicas institucionales.</p> <p>1.3 Asegurar la homogeneidad en la aplicación de criterios institucionales en la entrega de productos y servicios a nivel nacional.</p>
2. Conducir la agenda de modernización del Servicio, impulsando la mejora de procesos, la incorporación de tecnologías y la eficiencia en el uso de los recursos institucionales.	<p>2.1 Liderar los proyectos transversales de modernización institucional, incluyendo digitalización de procesos y mejora de la infraestructura tecnológica del Servicio.</p> <p>2.2 Promover la revisión y simplificación de procedimientos internos que afecten la oportunidad y calidad de los productos y servicios de la Institución con la finalidad de mejorarlos.</p> <p>2.3 Impulsar la medición sistemática del</p>

² Convenio de desempeño y condiciones de desempeño de Altas/os Directivos Públicos se encuentran disponibles en la página de postulación para su aprobación

	desempeño institucional mediante indicadores de gestión, utilizando los sistemas informáticos afines.
3. Fortalecer la gestión territorial del Servicio, asegurando que las Direcciones Regionales e Inspecciones cuenten con el respaldo y la coordinación necesarios para cumplir sus funciones.	<p>3.1 Articular el trabajo del nivel central con las Direcciones Regionales, facilitando el flujo de información, la bajada de lineamientos y el levantamiento de necesidades territoriales.</p> <p>3.2 Apoyar al Director Nacional en el seguimiento del desempeño de las Direcciones Regionales y en la identificación de brechas operativas que requieran intervención.</p>
4. Conducir un diálogo institucional constructivo con las asociaciones de funcionarios del Servicio, en materias de gestión interna y condiciones generales de trabajo.	<p>4.1 Establecer instancias regulares de interlocución con las asociaciones de funcionarios, canalizando sus planteamientos en las materias que son competencia del Servicio.</p> <p>4.2 Participar activamente en los organismos internos de participación funcionaria, tales como el Consejo de Bienestar, el Comité de Defensa Funcionaria y la Junta Calificadora Central.</p> <p>4.3 Coordinar con la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas la implementación de políticas que favorezcan un buen clima laboral.</p>
5. Incorporar los estándares de integridad pública en la gestión institucional del Servicio, a fin de fortalecer la probidad en la Institución.	<p>5.1 Asegurar la implementación de los programas de integridad pública en las unidades bajo coordinación del Subdirector.</p> <p>5.2 Velar por el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa y pasiva en la gestión interna del Servicio.</p>

1.4 RENTA DEL CARGO

El no cumplimiento de las metas establecidas en el Convenio de Desempeño, que debe suscribir el/la Alto Directivo/a Pública, tendrá efectos en la remuneración en el siguiente año de su gestión.

El cargo corresponde a un grado 2° de la Escala de Remuneraciones de los Servicios Fiscalizadores, más un porcentaje de Asignación de Alta Dirección Pública de un **40%**. Incluye las asignaciones de modernización. Su renta líquida promedio mensualizada referencial asciende a **\$6.464.000.-** para un/a no funcionario/a, la que se obtiene de una aproximación del promedio entre el "Total Remuneración Líquida Aproximada" de los meses sin asignación de modernización y el "Total Remuneración Líquida Aproximada" de los meses con asignación de modernización, cuyo detalle es el siguiente:

*Renta líquida promedio mensual referencial meses sin asignación de modernización (enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre) **\$5.499.000.-**

Renta líquida promedio mensual referencial meses con asignación de modernización (marzo, junio, septiembre y diciembre) **\$8.394.000.-

El componente colectivo de la asignación de modernización se percibe en su totalidad después de cumplir un año calendario completo de antigüedad en el servicio.

El componente base de la asignación especial de calidad de servicio se percibe, siempre que el directivo haya prestado servicios sin solución de continuidad en la Dirección del Trabajo durante a lo menos seis meses del año objeto de la evaluación.

II. PERFIL DEL CANDIDATO O CANDIDATA

2.1 REQUISITOS LEGALES ³

Este componente es evaluado en la **etapa I de Admisibilidad**. Su resultado determina en promedio a un 90% de candidatos/as que avanzan a la siguiente etapa.

a) Título profesional de una carrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a 5 años en el sector público o privado, o

b) Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en Chile de acuerdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a 6 años en el sector público o privado.

Fuente: Artículo N° 2 del DFL N° 1, de fecha 27 abril de 2022, del Ministerio de Hacienda.

2.2 EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS

Este componente es evaluado en la **etapa II de Filtro Curricular**. Su resultado determina en promedio, un 12% de candidatos/as que avanzan a la siguiente etapa de evaluación. Este análisis se profundizará en la etapa III.

Se requiere contar con al menos 3 años de experiencia en cargos de dirección, jefatura o coordinación de equipos o proyectos, en áreas de gestión institucional y/o administración y/u operaciones y/o servicios, en un nivel apropiado para las necesidades específicas de este cargo*.

Adicionalmente, se valorará tener experiencia en: **

- Gestión de servicios públicos, especialmente con estructura territorial desconcentrada.
- Procesos de modernización institucional, transformación digital o mejora de procesos en organizaciones complejas.
- Gestión y desarrollo de personas, estatuto administrativo y clima organizacional y/o relaciones con asociaciones de funcionarios o sindicatos en el ámbito institucional.
- Planificación estratégica, control de gestión institucional
- Gestión de recursos financieros y tecnológicos en instituciones públicas o privadas.
- Legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo, o trabajo sustantivo con el Sistema de Administración Laboral.

***Se considerará la experiencia laboral de los últimos 15 años. Es un criterio excluyente.**

****No es un criterio excluyente, entrega puntaje adicional en el análisis curricular.**

³Para el cómputo de la duración de la carrera que da origen al título profesional de pregrado, podrán sumarse los estudios de postgrado realizados por el mismo candidato. En el evento que los estudios de postgrado de quien postula hayan sido cursados en el extranjero, para poder complementar la duración de la carrera de pregrado es necesario que dichos estudios superiores se encuentren reconocidos o validados en Chile, conforme el marco normativo vigente."

Fuente legal: Parte final, del inciso final, del artículo cuadragésimo, de la Ley N° 19.882."

2.3 VALORES PARA EL EJERCICIO DEL CARGO

VALORES Y PRINCIPIOS TRANSVERSALES

PROBIDAD Y ÉTICA EN LA GESTIÓN PÚBLICA

Capacidad de actuar de modo honesto, leal e intachable, respetando las políticas institucionales, resguardando y privilegiando la generación de valor público y el interés general por sobre el particular. Implica la habilidad de orientar a otros hacia el cumplimiento de estándares éticos.

VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Capacidad de reconocer el rol que cumple el Estado en la calidad de vida de las personas y mostrar motivación por estar al servicio de los demás, expresando ideas claras de cómo aportar al desarrollo de acciones que contribuyan al bien de la sociedad. Implica el interés y voluntad de comprometerse con la garantía de los principios generales de la función pública, los derechos y deberes ciudadanos y las políticas públicas definidas por la autoridad.

CONCIENCIA DE IMPACTO PÚBLICO

Capacidad de comprender el contexto, evaluando y asumiendo responsabilidad del impacto que pueden generar sus decisiones en otros. Implica la habilidad de orientar la labor de sus trabajadores hacia los intereses y necesidades de la ciudadanía, añadiendo valor al bienestar público y al desarrollo del país.

2.4 COMPETENCIAS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO

Este componente es evaluado por las empresas consultoras en la segunda fase de la **etapa III** que corresponde a la **Evaluación por Competencias**. Su resultado determina en promedio, un 5% de postulantes que pasan a las entrevistas finales con el Consejo de Alta Dirección Pública o Comité de Selección, según sea el caso.

COMPETENCIAS

C1. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Capacidad para generar un plan comunicacional en situaciones complejas o relevantes, consistentes y alineadas con la estrategia de la organización. Considera medios disponibles, audiencia, contexto e impacto del mensaje, desarrollando un relato claro y facilitando espacio para la escucha y diálogo constructivo.

C2. GESTIÓN Y LOGRO

Capacidad para impulsar proyectos o iniciativas desafiantes para las metas de la organización, gestionando los planes de trabajo de manera ágil, orientando al equipo hacia el logro de objetivos y definiendo indicadores de éxito para gestionar el avance y cumplir con el logro de resultados de calidad.

C3. MANEJO DE CRISIS Y CONTINGENCIAS

Capacidad para responder a situaciones emergentes de conflicto o crisis de manera efectiva, implementando planes de acción oportunos y generando las coordinaciones pertinentes para responder de forma temprana a la situación. Implica realizar una evaluación de las causas e impactos logrando un aprendizaje significativo para la organización.

C4. LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS

Capacidad para alinear a los equipos con el propósito de la organización, promoviendo espacios de diálogo que faciliten el logro de acuerdos y desarrollo de iniciativas conjuntas. Gestiona activamente el desarrollo de talento, mapeando las capacidades dentro de su equipo, abordando los desafíos de desempeño con claridad y tomando decisiones complejas con convicción.

C5. MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN

Capacidad para identificar oportunidades de mejora, impulsando la generación de aportes que agreguen valor a la organización. Implica promover el desarrollo de propuestas novedosas para enfrentar los desafíos de la organización, facilitando espacios de colaboración y co-creación dentro de los equipos.

III. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

3.1 DOTACIÓN

Dotación Total (planta y contrata)	2.343
Presupuesto Anual	\$ 112.556.098.000.-

3.2 CONTEXTO Y DEFINICIONES ESTRATÉGICAS DEL SERVICIO

La Dirección del Trabajo es un Servicio técnico dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el cual se vincula a través de la Subsecretaría del Trabajo, conforme lo establece el Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967 del mismo Ministerio.

La Dirección del Trabajo cumple un rol clave en el Sistema de Administración Laboral, desarrollando diversas funciones operativas en las áreas de Inspección, relaciones laborales, sistemas alternativos de solución de conflictos y divulgación de la legislación laboral. Asimismo, la Dirección del Trabajo tiene la atribución de fijar, por medio de dictámenes, el sentido y alcance de la legislación laboral. En el ámbito previsional tiene atribuciones en parte del control de la evasión y elusión; en el de la seguridad y salud en el trabajo comparte atribuciones con la Superintendencia de Seguridad Social, la Autoridad Sanitaria, el Servicio Nacional de Geología y Minería y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, a los que se suma el Sistema de Mutualidades de Empleadores.

El desarrollo de estas funciones y, en particular, el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras impone un trabajo de coordinación permanente con otros organismos del Estado, tanto a nivel nacional como en el ámbito regional. En este último nivel se relaciona con las Delegaciones Presidenciales Regionales y Provinciales, los Gobiernos Regionales y diversas instituciones públicas de la región, en especial con aquellos organismos con los que comparte facultades fiscalizadoras.

En el nivel internacional, la Dirección del Trabajo se vincula especialmente con la Organización Internacional del Trabajo, manteniendo con dicho organismo una relación de cooperación y asistencia técnica constante. Además, con similar propósito, se relaciona con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social

Misión

Velar por la correcta aplicación de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo en las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales, mediante la fiscalización eficaz de su cumplimiento -con especial énfasis en el combate a la informalidad laboral-, la fijación oportuna de su sentido y alcance por medio de dictámenes, la prevención y solución de los conflictos del trabajo, y la entrega de un servicio moderno, oportuno y de calidad a la ciudadanía.

Objetivos Estratégicos Institucionales

1.- Fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo, gestionando la denuncia mediante el uso de tecnologías de la información que permitan aplicar la inteligencia inspectiva, tanto para los procesos de fiscalización reactiva como para la fiscalización de oficio por programa, incorporando además la fiscalización electrónica.

2.- Contribuir, desde el ámbito de competencia del Servicio, al funcionamiento del mercado laboral formal, facilitando el cumplimiento de la normativa por parte de los empleadores y revisando las cargas regulatorias de los procedimientos a cargo del Servicio.

3.- Fijar el sentido y alcance de la legislación laboral por medio de la emisión de pronunciamientos jurídicos, en las relaciones entre trabajadores, empleadores y organizaciones sindicales.

4.- Aumentar la cobertura y mejorar los productos y servicios de atención directa a los usuarios, incorporando mecanismos de participación ciudadana que permitan recabar su opinión sobre políticas, programas y materias de competencia del Servicio.

5.- Promover instancias de diálogo tripartito mediante los sistemas de prevención y solución de conflictos, mesas de trabajo y consejos tripartitos regionales de usuarios.

Productos Estratégicos

1.- Fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo.

2.- Pronunciamientos jurídicos.

3.-Mecanismos de prevención y solución de conflictos del trabajo.

4.- Atención a usuarios.

5.- Asistencia técnica.

6.- Registro de organizaciones sindicales e instrumentos colectivo.

**3.3
USUARIOS y
USUARIAS
INTERNOS Y
EXTERNOS**

USUARIOS INTERNOS:

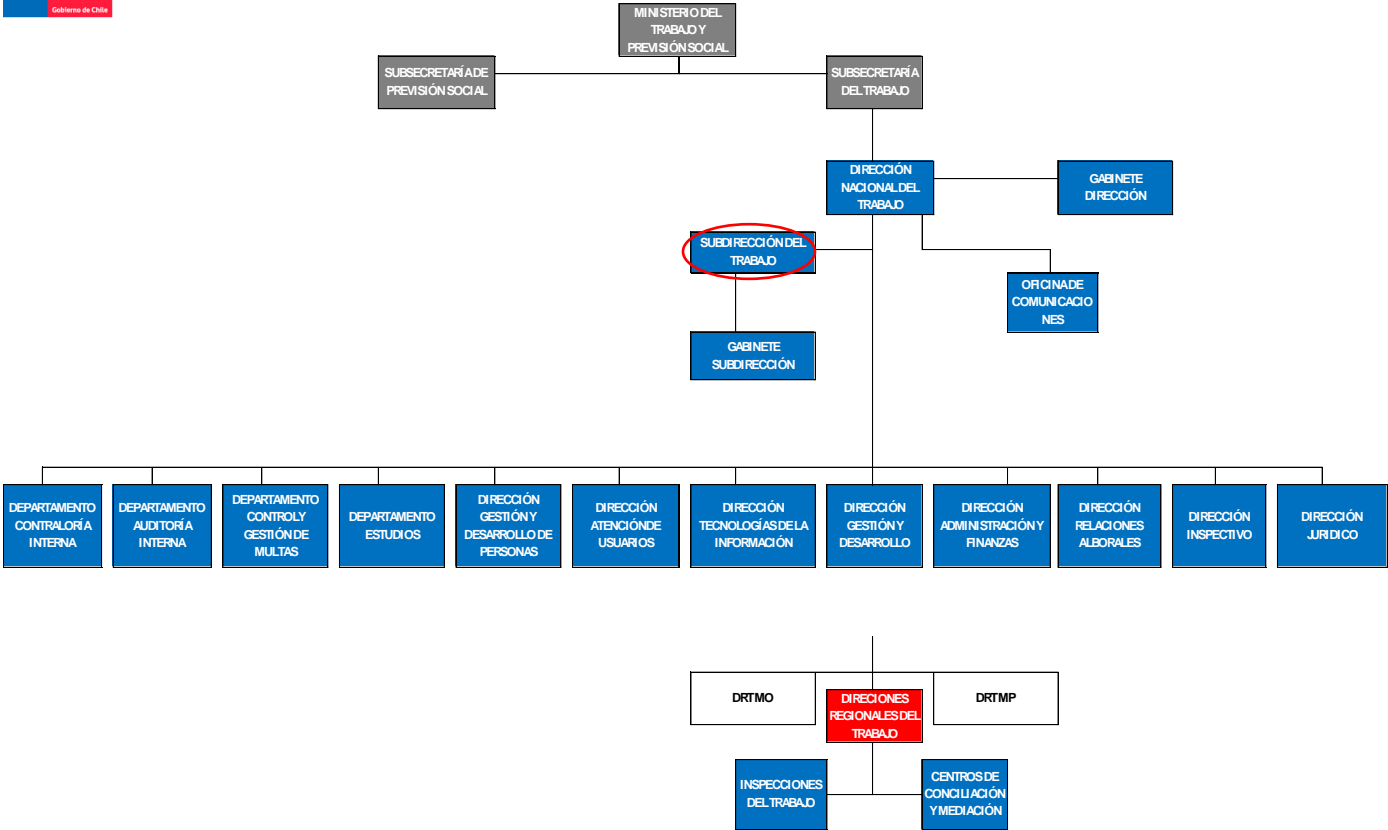
- Director/a Nacional del Trabajo
- Direcciones y Departamentos del Servicio.
- Funcionarios/as del Servicio.
- Direcciones Regionales.
- Inspecciones Provinciales y Comunes.
- Centros de Conciliación y Mediación Laboral.
- Asociaciones de Funcionarios/as

USUARIOS EXTERNOS:

- Organismos Públicos.
- Congreso Nacional.
- Ministerios.
- Trabajadores.
- Empleadores
- Organizaciones sindicales.
- Organismos Internacionales.
- O.N.G.

3.4 ORGANIGRAMA

Organigrama del Servicio.



Los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública son los siguientes:

- Director o Directora Nacional.
- Subdirector o Subdirectora.
- 8 Directores.
- 17 Directores o Directoras Regionales.

IV. CONDICIONES DE DESEMPEÑO DE LOS/LAS ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS

- Nombramiento.

La autoridad competente sólo podrá nombrar en cargos de alta dirección pública a alguno de los postulantes propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública o Comité de Selección, según corresponda. Si, después de comunicada una nómina a la autoridad, se produce el desistimiento de algún candidato que la integraba, podrá proveerse el cargo con alguno de los restantes candidatos que la conformaron. Con todo, la autoridad podrá solicitar al Consejo de Alta Dirección Pública complementar la nómina con otros candidatos idóneos del proceso de selección que la originó, respetando el orden de puntaje obtenido en dicho proceso.

- Extensión del nombramiento y posibilidad de renovación.

Los nombramientos tendrán una duración de tres años. La autoridad competente podrá renovarlos fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las evaluaciones disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los convenios de desempeño suscritos.

La decisión de la autoridad competente respecto de la renovación o término del periodo de nombramiento deberá hacerse con treinta días corridos de anticipación a su vencimiento, comunicando tal decisión en forma conjunta al interesado y a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la que procederá, si corresponde, a disponer el inicio de los procesos de selección.

- Efectos de la renuncia del directivo nombrado en fecha reciente.

Si el directivo designado renunciare dentro de los seis meses siguientes a su nombramiento, la autoridad competente podrá designar a otro de los integrantes de la nómina presentada por el consejo o el comité para dicho cargo.

- Posibilidad de conservar el cargo en la planta si se posee.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios conservarán la propiedad del cargo de planta de que sean titulares durante el periodo en que se encuentren nombrados en un cargo de alta dirección pública, incluyendo sus renovaciones. Esta compatibilidad no podrá exceder de nueve años.

- Cargos de exclusiva confianza para los efectos de remoción.

Los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, para efectos de remoción, se entenderán como de "exclusiva confianza". Esto significa que se trata de plazas de provisión reglada a través de concursos públicos, pero las personas así nombradas permanecerán en sus cargos en tanto cuenten con la confianza de la autoridad facultada para decidir el nombramiento.

- Obligación de responder por la gestión eficaz y eficiente.

Los altos directivos públicos, deberán responder por la gestión eficaz y eficiente de sus funciones en el marco de las políticas públicas.

Conforme así lo dispone el Artículo 64 del Estatuto Administrativo, serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas, las siguientes:

a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones;

b) Velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia, y

c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios.

- Obligación de dedicación exclusiva y excepciones.

Los/as altos/as directivos/as públicos/as deberán desempeñarse con "dedicación exclusiva", es decir, por regla general, existe imposibilidad de desempeñar otra actividad laboral remunerada, en el sector público o privado.

Conforme así lo dispone el inciso primero, del Artículo Sexagésimo Sexto, de la Ley N° 19.882, los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 1° de la ley N° 19.863, y les será aplicable el artículo 8° de dicha ley.

El artículo 1° de la Ley N° 19.863, en los incisos quinto, sexto y séptimo, regula los escenarios de compatibilidad, lo que nos lleva a concluir que el desempeño de cargos del Sistema de Alta Dirección Pública permite el ejercicio de los derechos que atañen personalmente a la autoridad o jefatura; la percepción de los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable; los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio, del desempeño de la docencia prestada a instituciones educacionales y de la integración de directorios o consejos de empresas o entidades del Estado, con la salvedad de que dichas autoridades y los demás funcionarios no podrán integrar más de un directorio o consejo de empresas o entidades del Estado, con derecho a percibir dieta o remuneración. Con todo, la dieta o remuneración que les corresponda en su calidad de directores o consejeros, no podrá exceder mensualmente del equivalente en pesos de veinticuatro unidades tributarias mensuales.

Cuando la dieta o remuneración mensual que les correspondiere fuere de un monto superior al que resulte de la aplicación del párrafo anterior, el director o consejero no tendrá derecho a la diferencia resultante y la respectiva empresa o entidad no deberá efectuar su pago.

Es importante relevar que la compatibilidad de remuneraciones a la cual se alude en los párrafos que anteceden, en relación a la posibilidad de percibir dietas por integrar directorios y/o consejos de entidades del Estado, no resulta aplicable durante el año 2026, toda vez que el artículo 32, de la Ley N° 21.796, de Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año 2026, publicada en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 2025, establece, entre otras materias, que los Jefes y Jefas Superiores de los Servicios Públicos y otras autoridades y funcionarios/as regidos/as por el Título II de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se establece en el decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, no tendrán derecho a percibir dieta o remuneración que provenga del hecho de integrar consejos o juntas directivas, presidencias, vicepresidencias, directorios, comités u otros equivalentes con cualquier nomenclatura, de empresas o entidades públicas que incrementen la remuneración correspondiente.

Esta norma legal, podría tener vigencia o no para el ejercicio presupuestario del año 2027, dependiendo del tenor de la Ley de Presupuestos del Sector Público para dicho año, la cual, comenzará a regir a partir del 01 de enero del año referido.

- Por otro lado, los/as altos/as directivos/as públicos/as pueden desarrollar actividades docentes.

Sobre el particular, el Artículo 8° de la Ley N° 19.863, dispone, lo siguiente:

“Independientemente del régimen estatutario o remuneratorio, los funcionarios públicos podrán desarrollar actividades docentes durante la jornada laboral, con la obligación de compensar las horas en que no hubieren desempeñado el cargo efectivamente y de acuerdo a las modalidades que determine el jefe de servicio, hasta por un máximo de doce horas semanales. Excepcionalmente, y por resolución fundada del jefe de servicio, se podrá autorizar, fuera de la jornada, una labor docente que exceda dicho tope.”

Es importante relevar que la norma que se refiere a la compatibilidad entre el ejercicio de un cargo directivo y el desarrollo de actividades docentes, se refiere precisamente a "actividades docentes", lo que excluye a las actividades de capacitación.

- Posibilidad de percibir una indemnización en el evento de desvinculación.

El alto directivo público tendrá derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución en calidad de alto directivo público, con un máximo de seis, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo quincuagésimo octavo de la Ley N° 19.882.

La indemnización se otorgará en el caso que el cese de funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca por el término del periodo de nombramiento sin que este sea renovado.

- Otras obligaciones a las cuales se encuentran afectos los altos directivos públicos.

Los altos directivos públicos, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, previsto en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República y en el Título III de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, N° 18.575.

De igual modo, los altos directivos públicos, deberán dar estricto cumplimiento a las normas sobre Declaración de Intereses y de Patrimonio, previstas en la Ley N° 20.880 y su Reglamento, contenido en el Decreto N° 2, de 05 de abril de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Los Jefes Superiores de los Servicios Públicos y los Directores Regionales, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.730 y su Reglamento, son sujetos pasivos de Lobby y Gestión de Intereses Particulares, por lo que quedan sometidos a dicha normativa para los efectos indicados.

De igual modo, otros directivos, en razón de sus funciones o cargos pueden tener atribuciones decisorias relevantes o pueden influir decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones. En ese caso, por razones de transparencia, el jefe superior del servicio anualmente individualizará a las personas que se encuentren en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente en sitios electrónicos. En ese caso, dichos directivos pasarán a poseer la calidad de Sujetos Pasivos de la Ley del Lobby y Gestión de Intereses Particulares y, en consecuencia, quedarán afectos a la Ley N° 20.730 y su Reglamento, contenido en el Decreto N° 71, de junio de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

La Dirección del Trabajo y su personal deberán guardar absoluta reserva y secreto de la información y de los datos personales que tomen conocimiento, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo, deberán abstenerse de usar los datos recopilados en beneficio propio o de terceros. (Artículo 517 del artículo 1 de la Ley N° 21.327 Modernización de la Dirección del Trabajo)

Finalmente, los altos directivos públicos deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en las Resoluciones Afectas Números 1 y 2 de 2017, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que establecen normas de aplicación general en materias de Gestión y Desarrollo de Personas en el Sector Público.

*Prohibiciones.

-Queda prohibido a los funcionarios del Trabajo, bajo pena de suspensión o destitución, divulgar los datos que obtengan con motivo de sus actuaciones.

Incurrirán, además, en las sanciones establecidas en el artículo 246° del Código Penal si revelaren secretos industriales o comerciales de que hubieran tenido conocimiento en razón de su cargo. (Artículo 40° del Título V del DFL 2, de 30 de Mayo de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

-Prohíbese a los funcionarios del Servicio, bajo las mismas sanciones señaladas en el inciso 1° del artículo anterior, desempeñarse en forma particular en funciones relacionadas con su cargo y que comprometen el fiel y oportuno cumplimiento de sus deberes. (Artículo 41° del Título V del DFL 2, de 30 de Mayo de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).